



Proceso	Ejecutivo Hipotecario
Demandante	Distribuciones Kibu S.A.S. (hoy Samoga S.A.S.)
Demandado	Inversiones Mundial y Asociados S.A.S.
Radicado	05001 31 03 006 2014 00533 01
Procedencia	Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Medellín
Instancia	Segunda
Ponente	Juan Carlos Sosa Londoño
Asunto	Auto No. 02
Decisión	Confirma
Tema	Nulidad. Principios. Convalidación.
	“La trascendencia impone que el defecto menoscabe los derechos de los sujetos procesales, por atentar contra sus garantías o cercenarlas. “Por último, la convalidación, en los casos en que ello sea posible, excluye la configuración de la nulidad cuando el perjudicado expresa o tácitamente ratificó la actuación anómala, en señal de ausencia de afectación a sus intereses (cfr. SC, 19 dic. 2011, rad. n.º 2008-00084-01). (Subrayas fuera del texto)

2023-095

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA UNITARIA CIVIL DE DECISIÓN

Medellín, veinticinco (25) de enero de dos veinticuatro (2024)

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Inversiones Mundial y Asociados S.A.S. frente al auto del 19 de mayo del año anterior, proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín dentro del trámite ejecutivo hipotecario instaurado en su contra por Distribuciones Kibu S.A.S. hoy Samoga S.A.S., que rechazó su solicitud de nulidad.

## I. ANTECEDENTES

1. Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín se adelanta el referido proceso hipotecario, en el que, quien manifestó tener el derecho de postulación conferido por la sociedad demandada solicitó la declaración de nulidad de todo lo actuado a partir del 31 de enero de 2020 por violación al debido proceso, con fundamento en que

(i) mediante auto del 15 de enero de 2020 se le aceptó la renuncia a la entonces apoderada de la parte demandada; luego, el 31 de enero siguiente el incidentista radicó poder debidamente otorgado para continuar con la representación, pero nunca se le reconoció personería.

(ii) Luego, y a pesar de que a la anterior togada ya se le había aceptado la renuncia ésta continuó actuando en el proceso, incluso se le dio trámite a un recurso de reposición y subsidiariamente apelación interpuso el 16 de julio de 2021.

(iii) No puede aceptarse que al nuevo apoderado se le reconoció personería de manera tácita porque se le dio trámite a una objeción –sic- sino también a los memoriales radicados por la anterior apoderada a pesar de que la renuncia al poder le había sido aceptada. (archivo 1, solicitud de nulidad)

2. Vencido el traslado de la solicitud a la parte actora sin que se hubiera pronunciado, por auto del 19 de mayo pasado, el *a quo* dedujo que la petición de nulidad se fundamentaba en la causal 4ª del artículo 133 del C. General del Proceso, toda vez que fue formulada por alguien sin reconocimiento de personería, siendo la apoderada Restrepo la que actúa en el proceso, careciendo de legitimación según el artículo 135 ibídem, por lo que rechazó de plano la solicitud de nulidad. (archivo 3 ib.)

**3.** Inconforme con la decisión fue recurrida por el interesado en reposición y subsidiariamente apelación bajo las consideraciones que se sintetizan así: (i) el juez de conocimiento no resolvió de fondo la nulidad propuesta, pues no analizó cómo se afectó el debido proceso por el actuar de dos apoderados judiciales; además, si I no estaba, tramitó la oposición que interpuso; y (ii) nada dijo sobre el hecho de haberse dado trámite a los recursos interpuestos por la anterior apoderada a la que ya se le había aceptado la renuncia al poder, negándole a él esa posibilidad. (archivo 4)

**4.** Del recurso se dio traslado a la parte demandante quien luego de hacer un recuento de la actuación procesal realizada por los dos abogados que han actuado como apoderados de la parte demandada, concluyó en que ambos trabajan para la firma “Soluciones Legales”, en tanto los memoriales fueron remitidos de su correo electrónico, por lo que eran conocedores de lo que estaba aconteciendo, por lo que se opuso la nulidad alegada por no estar consagrada en el artículo 133 del C. General del Proceso. Finalmente, peticionó la aplicación a los poderes de ordenación e instrucción sancionándolos o denunciándolos por pretender dilatar el proceso y ejercer actuaciones contrarias a la justicia, lealtad y buena fe procesal. (archivo 6)

**5.** La reposición fue resuelta de manera desfavorable por auto del 2 de octubre siguiente al considerar el juez de conocimiento que la falta de reconocimiento de personería no afectaba el debido proceso, pues dicha solicitud no requería de trámite, ya que la personería se ejerce a partir de la actuación desplegada por los abogados mediante memoriales y peticiones, por lo que legitimación proviene del mandato debidamente conferido por el

poderdante y aportado al expediente, y no de la providencia que reconoce personería para actuar.

Agregó que si bien es cierto en se dio trámite al recurso de reposición y en subsidio de apelación presentado por la abogada que había renunciado al poder, también lo es que fue enviado desde el propio correo electrónico de la parte ejecutada, es decir, desde `solucioneslegalesltda@gmail.com`, lo que significa que la parte que alegó la nulidad conoció y envió el recurso presentado en su nombre por una abogada carente de poder y sin embargo nada dijo al respecto, dando lugar al hecho generador de la nulidad, toda vez que al haber sido dicha parte la que envió el recurso no solo: (i) debió corregir la situación aportando con el escrito el poder respectivo o al menos allegándolo posteriormente en el término de ejecutoria del auto que recurría, y (ii) omitió advertir la situación al Despacho en cada una de las etapas en las que se continuó el trámite (esto es, una vez se corrió traslado del recurso, se resolvió, se concedió la apelación, etc.), pues a pesar de haber tenido conocimiento de la actuación irregular de la abogada, en tanto todas las actuaciones proferidas fueron notificadas por estados electrónicos, no se interpuso recurso alguno ni efectuó manifestación al respecto oportunamente.

Respecto a la nulidad constitucional hace referencia a la prueba obtenida con violación del debido proceso y no a la actuación de la anterior apoderada a pesar de haber renunciado al mandato conferido.

**6.** Concedida la impugnación vertical, el expediente fue remitido a la Corporación, la que decide previas las siguientes

## II. CONSIDERACIONES

1. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la providencia AC2942-2021, respecto a la institución de la nulidad procesal, dijo que:

“Las nulidades buscan resguardar las diversas facetas del derecho fundamental al debido proceso mediante la remoción y reanudación de los actos viciados que afectaron esa garantía constitucional. Por tanto, la anulación requiere que el defecto esté consagrado como tal en el ordenamiento adjetivo (principio de taxatividad), que el solicitante no lo haya propiciado (postulado de legitimación), ni que haya actuado sin proponerlo (convalidación o saneamiento), y que, además, el vicio lesione alguna de las aristas del debido proceso (regla de trascendencia).”.

2. Frente a los principios que gobiernan aquella institución, en concreto, esto es, los de *especificidad, protección, trascendencia y convalidación*, la Corte ha señalado:

“La especificidad alude a la necesidad de que los hechos alegados se subsuman dentro de alguna de las causales de nulidad taxativamente señaladas en las normas procesales o en la Constitución Política, sin que se admitan motivos adicionales (cfr. CSJ, SC11294, 17 ag. 2016, rad. n.º 2008-00162-01).

“La protección se relaciona «con la legitimidad y el interés para hacer valer la irregularidad legalmente erigida en causal de nulidad, en cuanto, dado el carácter preponderantemente preventivo que le es inherente, su configuración se supedita a que se verifique una lesión a quien la alega» (CSJ, SC, 1 mar. 2012, rad. n.º 2004-00191-01).

“La trascendencia impone que el defecto menoscabe los derechos de los sujetos procesales, por atentar contra sus garantías o cercenarlas.

“Por último, la convalidación, en los casos en que ello sea posible, excluye la configuración de la nulidad cuando el perjudicado expresa o tácitamente ratificó la actuación anómala, en señal de ausencia de

afectación a sus intereses (cfr. SC, 19 dic. 2011, rad. n.º 2008-00084-01). (Subrayas fuera del texto)

“Itérese, de izarse un cargo fundado en una nulidad procesal, por fuera de las anteriores directrices, éste debe desestimarse”. (SC280-2018, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo)

2. Atendiendo al anterior prolegómeno jurisprudencial se tiene que, frente al principio de *especificidad* el incidentista sustentó su solicitud de nulidad en el artículo 29 de la Constitución Nacional, “*prueba obtenida con violación al debido proceso*”; en la actualidad con la entrada en vigencia del nuevo estatuto de ritos civiles (ley 1534 de 2012), está reglada en el artículo 14<sup>1</sup>, causal que obviamente no se configura, toda vez que lo alegado tiene que ver con la carencia integral de poder para actuar de quien ya no fungía como tal.

3. Ha de resaltarse que la carga de noticiar al poderdante la renuncia al encargo encomendado, aceptada en este caso en proveído del 15 de enero de 2020, tiene por finalidad que éste adelante las diligencias necesarias para el agenciamiento de sus derechos, pero tal exigencia resultó innecesario como que como que el 31 de enero siguiente se radicó poder debidamente otorgado, lo que significaba, sin lugar a dudas, que como la renuncia no había surtido efectos, si culminaba el anterior poder. Ese es el contenido del artículo 76 del C. general del proceso: “*El poder termina con la radicación en secretaria del escrito en virtud del cual se revoque o **se designe otro apoderado**, a menos de que el nuevo poder se hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas dentro del proceso...*”. (Negritas intencionales)

---

<sup>1</sup> STC13864 de 2018.

La omisión de la providencia que reconocía personería al nuevo apoderado y el permitir actuar a quien ya no representaba los derechos de la parte demandada, en nada afectó sus derechos procesales, en otras palabras, no se lesionó el principio de trascendencia que rige las nulidades.

4. A lo anterior, asaz para la confirmación del auto recurrido, se suma que de haber existido la irregularidad pregonada, sus efectos desaparecieron en virtud de la actuación del apoderado sin alegarla, convalidación tácita la que *“por contraste fue objeto de estricta reglamentación por el legislador y consulta particularmente la actitud o comportamiento que la parte interesada adopte frente a la misma, para lo que importa sobremanera conocer la oportunidad que se tiene para alegarla; a este respecto, y sin perjuicio de un estudio más a espacio, se puede decir que existe una regla de oro, consistente en que la convalidación tácita adviene cuando no se aduce la nulidad una vez que se tiene ocasión para ello.*

*“Es apenas obvio que sólo la parte afectada puede saber y conocer el perjuicio recibido y de una u otra manera lo relevará con su actitud: más hácese patente que si su interés está dado en aducir la nulidad, es de suponer que lo hará tan pronto ola conozca, como que hacerlo después, a la sazón, el acto procesal, si bien viciado, no le representó agravio alguno; amén de reservarse esa arma para esgrimirla sólo en caso de necesidad y según lo aconseje el vaivén de las circunstancias es abiertamente desleal”* ( (C.S.J. Sent. 11 de marzo de 1991. M.P. Rafael Romero Sierra)

### III. DECISION

En mérito de lo expuesto, el **Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria Civil de Decisión, CONFIRMA** auto del 19 de mayo del año anterior, proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín, mediante el cual se rechazó la solicitud de nulidad formulada por la parte demandada. Sin costas en esta instancia por no haberse causado.

**NOTIFIQUESE**

**JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO**  
**Magistrado**

Firmado Por:  
Juan Carlos Sosa Londono  
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional  
Sala 001 Civil  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **de6f2361dfeea4f16a163341cf54f946054db73659bae9dfa95aab8a4dec6**  
Documento generado en 26/01/2024 01:55:38 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>